

MUNICIPALIDAD DE RUFINO c/ CASTELLANI, MARIA FERNANDA -APREMIOS
FISCALES MUNICIPALES- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD

Cita: 696/25

Nº Saij:

Nº expediente:

Año de causa:

Nº de tomo: 2025

Pág. de inicio: 0

Pág. de fin: 0

Fecha del fallo: 23/09/2025

Juzgado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Santa Fe) - Santa Fe

Jueces

Jorge Camilo BACLINI

Roberto Héctor FALISTOCCO

Rafael Francisco GUTIERREZ

Eduardo Guillermo SPULER

Rubén Luis WEDER

Margarita Elsa ZABALZA

Texto del fallo

T. 2025, SENTENCIA NRO. 696

Provincia de Santa Fe, 23 de septiembre del año 2025.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución número 1151 de fecha 25 de octubre del 2024, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rufino, en autos "MUNICIPALIDAD DE RUFINO contra CASTELLANI, MARÍA FERNANDA -APREMIOS FISCALES MUNICIPALES- (CUIJ 21-26365093-7 Y 21-26367883-1)" (Expte. C.S.J. CUIJ N° 21-00516543-9); y,

CONSIDERANDO:

1. Por resolución número 1151 del 25 de octubre del 2024 el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rufino, en lo que resulta de interés, rechazó las excepciones articuladas por la accionada y mandó llevar adelante la ejecución pretendida hasta tanto la actora se hiciera íntegro cobro del capital reclamado, con más intereses y costas.

Contra el mencionado pronunciamiento la demandada interpuso el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055. Fundó sus alegaciones en la arbitrariedad normativa y fáctica; en la falta de motivación suficiente y en la vulneración de derechos fundamentales en la que habría incurrido el a quo al sentenciar como lo hizo.

En el memorial impugnativo, expresa que el magistrado de grado se apartó manifiestamente de lo previsto en el artículo 8 inciso h de la ley 5066.

Así, destaca que la demanda de apremio fue interpuesta el 31 de agosto del 2022 sin que hubiera quedado expedita la vía ejecutiva, por estar pendiente de resolución un recurso con efecto suspensivo interpuesto con antelación.

Relata que en fecha 31 de enero del 2022 realizó una presentación administrativa y que el 16 de septiembre del 2022, antes de la notificación de la demanda (26 de septiembre del 2022), interpuso un escrito pidiendo que se hiciera lugar a aquella impugnación.

En tal sentido, afirma que al excepcionar en baja instancia puso de resalto lo previsto en el artículo 54 de la ley 8173, en cuanto a que "... la interposición del recurso de reconsideración en tiempo y forma suspende la obligación de pago...", y que "... contrariando todo ello, sin resolver el recurso previamente y después de haber tomado conocimiento del ingreso en el Municipio del escrito de su interposición..." la actora inició el apremio.

En ese orden de ideas, manifiesta que el juez de grado al rechazar la defensa referida se apartó palmariamente de la norma mencionada más arriba e incurrió en autocontradicción.

En tal entender, expone que mediante su presentación en sede administrativa comenzó un trámite para cuestionar el tributo y que ese procedimiento, que se encontraba pendiente de resolución a la fecha de la demanda, de ser resultado por el Ente Municipal daría lugar a las instancias posteriores, incluso la vía contencioso administrativa a la que habría aludido el a quo.

Asimismo, dice que en contraposición a lo sostenido en la sentencia atacada, al oponer la defensa en examen su parte no cuestionó el procedimiento administrativo previo de formación del título ni el acierto de la determinación tributaria, sino que al mediar una actuación administrativa con efecto suspensivo irresuelta, no estaba expedita la vía del apremio.

Cita jurisprudencia en respaldo de su postulación, a lo cual amerita remitir en aras de la brevedad.

Por otra parte, expresa que los certificados contenidos en las presentes actuaciones "... no documentan una deuda líquida y exigible..." y que, no obstante ello, en el pronunciamiento puesto en jaque se rechazó la excepción de inhabilidad de título incoada con argumentaciones

genéricas relativas a que el título se presume legítimo y auténtico, en un claro apartamiento -dice- de las constancias de autos y la prueba rendida.

En tal marco, manifiesta que en la instancia de grado, además de haber sostenido que la mayor parte de los períodos fiscales reclamados se hallaban prescriptos y que las ordenanzas municipales que sirvieran de base para la liquidación del tributo serían "... nulas, de nulidad absoluta...", destacó que lo instrumentado no era líquido ni exigible dado que se hallaba pendiente un recurso con efecto suspensivo que restaba ejecutoriedad a las obligaciones contenidas en los títulos, por lo que estos resultaban inhábiles. Añade que "... [l]a prueba de todo ello (...) surge de autos pues el texto de tal recurso fue acompañado y la contraria no acreditó haberlo resuelto antes de interponer la demanda".

En ese sentido, insiste en que su parte no puso en tela de juicio la causa de las obligaciones ni el procedimiento de formación del título, sino que la inhabilidad del mismo devendría a resultas del efecto suspensivo del recurso articulado en sede administrativa.

Asimismo, afirma que nunca reconoció haber sido puesta en mora, por lo que el "reconocimiento" al que habría hecho referencia el juzgador de grado no habría existido.

Cita jurisprudencia a fin de hacer estribar sus fundamentos, a lo cual cabe remitirse.

Por otro lado, alega que el remedio excepcional intentado resultaría captado -además- por el supuesto previsto en el artículo 1 inciso 1 de la ley 7055.

Así, expone que al alegar la prescripción de una porción de lo reclamado en autos, invocó las disposiciones de la legislación de fondo aplicables por mandato constitucional que establecen un plazo de dos años contado desde el vencimiento de la obligación (artículos 2562 inciso c y 2556 del Código Civil y Comercial) y que postuló la inconstitucionalidad de las normas locales (artículo 34, 35 y 36 del Código Tributario Municipal) y "... la sentencia habría sido favorable a la validez de aquellas (sic)".

Agrega que también esgrimió la inconstitucionalidad del artículo 2532 del Código de fondo por cuanto "... el Congreso de la Nación carece de toda potestad para modificar el mandato constitucional mediante el cual las provincias renunciaron en favor de la Nación la potestad de legislar los códigos de fondo, por lo que resulta inválida constitucionalmente la delegación que dicha norma hace a las legislaciones locales para regular los plazos de prescripción...". Agrega que al estar en juego una cuestión federal, correspondería al Máximo Tribunal provincial actuar en la presente causa.

En tal entender, expresa que las normas locales avanzaron sobre la potestad de la Nación estableciendo un plazo de prescripción quinquenal; el inicio del cómputo a partir del primero

de enero siguiente al de la exigibilidad del pago; y las causales de suspensión e interrupción. Añade que en baja instancia se aplicaron dichas disposiciones, pese a su "... manifiesta inconstitucionalidad..." conforme los precedentes en la materia dictados por el alto Tribunal nacional.

En ese marco, afirma que los períodos que van desde enero del 2017 a julio del 2020 estarían prescriptos a tenor de lo previsto en el Código Civil y Comercial y los artículos 31 y 75 inciso 12 de la Carta Magna, pero que el magistrado de grado habría soslayado el control de constitucionalidad debido.

Asimismo, expone que se hizo prevalecer normas locales "... manifiestamente inconstitucionales..." con sustento en una norma ajena a la materia en debate (artículo 2560 del Código de fondo), con el argumento de que su parte no habría cuestionado la validez de la delegación a las legislaturas locales; hecho que -dice- sí realizó.

En ese orden de ideas, se agravia de que el juzgador de baja instancia no hubiera ponderado adecuadamente el perjuicio que genera a su parte la aplicación de uno u otro plazo de prescripción. Agrega que, por omisión, la sentencia convalida la constitucionalidad del artículo 2532 del Código de fondo "... invocando normas locales inconstitucionales arguyendo que la CSJN, hasta el momento, se ha expedido sobre la aplicación del anterior Código Civil pero no sobre el actual".

Por otra parte, señala que el decisorio impugnado fijó el inicio del cómputo de los plazos de prescripción con sustento en lo resuelto en "Ullate" por la Corte nacional. No obstante, expresa que ese precedente estableció, en cambio, la doctrina contraria.

A pesar de ello alega que, sin que implique una convalidación de lo decidido, incluso aplicando un plazo de cinco años, los períodos fiscales comprendidos entre enero y agosto del 2017 estarían prescriptos dado que transcurrió el plazo quinquenal desde su vencimiento hasta la fecha de la interposición de la demanda, sin que mediara intimación fehaciente hasta dicha fecha.

Por otro lado, expone que también se daría el supuesto previsto en el inciso 1 del artículo 1 de la ley 7055, toda vez que su parte postuló la inconstitucionalidad de las normas locales (artículos 5 y 7 de las ordenanzas número 3057/2016, 3131/2017 y 3262/2021 de la Municipalidad de Rufino) por contraposición con los artículos 72 y 74 de la ley 8173 y lo decidido habría sido favorable a la validez de aquellas.

En tal entender, destaca que las ordenanzas prevén una fórmula de determinación de la obligación tributaria que se aparta de lo contemplado en el Código Tributario Municipal. Así,

dice que se valúa a los inmuebles por metraje, zonas, superficie y otros parámetros y que el exceso con el que se grava a su parte habría quedado acreditado en autos mediante prueba pericial.

Asimismo, dice que el Ente Municipal soslayó la manda contenida en los artículos 1 a 3 de la ley 8173 relativa a la obligatoriedad de adoptar el Código Tributario Municipal y derogar toda norma que se le opusiera. Añade que, pese a lo alegado, el juzgador de baja instancia evadió la cuestión so pretexto de no poder decidir en el marco de la vía intentada.

Por otra parte, afirma que existe en las presentes actuaciones una cuestión federal simple, al haberse dictado un pronunciamiento contrario a los derechos fundamentales invocados, a saber, debido proceso legal; tutela judicial efectiva; y derecho de defensa.

Por último, plantea la existencia de cuestión federal compleja, producto de haber cuestionado en autos la inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 5066 y haber sido la sentencia favorable a la validez de la norma local.

2. El juez de baja instancia denegó la concesión del recurso interpuesto mediante resolución número 146, por considerar que no se verifica en el caso la existencia de un pronunciamiento con la definitividad requerida por la ley 7055. Asimismo, destacó que los agravios vertidos por la presentante sólo dejaban entrever su mera disconformidad con lo decidido.

3. La postulación de la quejosa cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos, e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda. Ordenar la devolución del depósito efectuado por la recurrente (artículo 8 ley 7055).

Regístrese y hágase saber.

FDO. DIGITALMENTE: FALISTOCCO - BACLINI - GUTIÉRREZ - SPULER - WEDER - ZABALZA - PORTILLA (SECRETARIA).

Tribunal de origen de la causa: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil,

Comercial y Laboral de la ciudad de Rufino.